

Comentario de actualidad

Muchos son los indicadores que respaldan el ambiente para la competitividad o, en otros términos, las características que impulsan o reprimen las actividades de los ciudadanos -empresas, escuelas, grupos, individuos, etcétera- en una jurisdicción territorial determinada.

Las entidades públicas locales tienen una importancia relevante en la competitividad de un territorio. En este sentido, ***el marco de apoyo a la competitividad de una comunidad, entre otros factores, es impactado de forma inversamente proporcional al tiempo que el sistema gubernamental le “cuesta” a la economía.*** Cuando hablamos de economía no sólo nos referimos a las transacciones mayores que registran los indicadores bursátiles o las cifras que respaldan los movimientos de las compañías transnacionales o el banco central de un país, sino a los conceptos asociados a la economía también pueden traducirse en los términos más *simples* o cotidianos: desde la fracción de los ingresos que se dedican a pagar los impuestos para el sostenimiento del gobierno, hasta el traslado de un empleado a su sitio de trabajo que representa un “costo” en términos del tiempo empleado para estas actividades. Es decir, aunque pareciera baladí, el tiempo es un recurso económico que no ha tenido -en términos generales- una justa contabilización.

Muchas sociedades han acuñado la popular frase “el tiempo es oro”, como un símil para asignar un valor a un recurso tan intangible como importante. El tiempo, en expresiones humanas, es finito y su transcurrir es lineal; es decir, está

limitado y no retorna. Bajo estas premisas, a diferencias de otros bienes, el tiempo es el más importante de los recursos no-renovables.

Cuando estos conceptos y premisas se vinculan a la actuación de los gobiernos, resulta interesante evaluar cómo la acción de las instituciones impacta irrenunciablemente en el tiempo de los usuarios de los servicios, es decir, en el recurso no-renovable de mayor valía. El tiempo es vida.

Las aseveraciones impulsan el planteamiento de dos escenarios: si las gestiones gubernamentales son las adecuadas, la utilización de los servicios públicos (permisos de trámites, vialidades, seguridad pública, entre muchos otros) no restarán “más tiempo” a los ciudadanos. Por otro lado, pudiéramos argumentar -sin explicaciones complejas- que el recurso de tiempo de los usuarios para suplir las deficiencias de los gobiernos es considerable. Para ilustrar las premisas, podríamos ejemplificar la utilización del recurso del tiempo para la realización de trámites “engorrosos” o la señalización vial que opera impropiamente.

En privilegio de estos ejemplos, un ineficiente control del tráfico afecta “el tiempo” que un automovilista requiere para trasladarse a su sitio de trabajo, y un sistema de trámites de permisos municipales inadecuado reduce “el tiempo” que los contribuyentes pueden dedicar a otras actividades. Si trasladamos los costos a términos monetarios, las cifras arrojarían que el precio que pagamos por la ineficiencia es muy alto.

La situación se torna más compleja cuando añadimos otras consideraciones. Los recursos monetarios que alimentan la función gubernamental

tienen una fuente preponderante y claramente identificable: los impuestos (o derechos) pagados por los ciudadanos. Esos impuestos resultan del trabajo (tiempo y energía) que los contribuyentes debieron utilizar para cubrir los montos que demanda un sistema fiscal.

Cuando la operación gubernamental es inadecuada, se demanda “más tiempo” a los ciudadanos para cubrir estas deficiencias. Es decir, es necesario utilizar “más tiempo” para realizar un trámite o es requerida la contratación de servicios complementarios, que implican recursos y que entrañan “más tiempo” de trabajo.

Bajo estas premisas, se podría demostrar que existe una “triple tributación”: aquella emanada de las obligaciones del ciudadano de contribuir para el sostenimiento del Estado, el cumplir con los requisitos para “cumplir” con las obligaciones que impone el Estado y la vinculada con la prestación deficiente de los servicios, que obliga a que los usuarios eroguen más recursos (de tiempo y monetarios -que finalmente requieren de tiempo para obtenerlos-) para suplir las carencias en la actuación de los gobiernos. Agregamos a esta reflexión que el “tiempo” de los ciudadanos es parte de su vida, por lo que es necesario identificar cuántas “vidas” cuesta la inadecuada operación gubernamental.

Si el tiempo dedicado por los ciudadanos para resarcir la actuación inconveniente de algunos entes públicos es una realidad, también son notables los esfuerzos que han emprendido muchos gobiernos para mejorar sus sistemas de

gestión y fortalecer la plataforma institucional que ofrezca un cauce pertinente al quehacer gubernamental.

Los gobiernos que han sabido adecuarse a los retos que implica establecer comunidades competitivas, donde sus habitantes o usuarios canalicen su tiempo y energías a “competir”, coinciden en haber establecido políticas y procesos administrativos enfocados a ofrecer resultados eficientes de las acciones gubernamentales.

Para este propósito, el objetivo de un buen gobierno debe ser la reducción del tiempo requerido para la operación gubernamental a través de maximizar la utilización de sus recursos buscando siempre el mayor impacto de sus acciones a favor del bienestar de la comunidad.

Hemos reiterado que aquellas administraciones que han sabido responder a los retos de la creciente globalización no son necesariamente sólo aquellas que atrajeron grandes inversiones o más empresas a la comunidad. En la mesa de los debates se ha demostrado que las respuestas de los gobiernos locales a los “embates globalizadores” están vinculadas al desempeño enfocado en resultados en un marco de fortalecimiento de su estructura que permite, entre varios rubros, el orden, la continuidad y la certidumbre en las acciones gubernamentales.

Si muchos gobiernos locales invierten recursos en campañas dirigidas al ahorro del agua, un recurso medianamente renovable, pudiéramos sugerir un proceso similar para aquellas entidades públicas que aplican costos añadidos a

los ciudadanos. Si cuidar el agua es impostergable, cuidar el TIEMPO es igualmente importante. Es la vida de los ciudadanos.

Octavio Chávez, invitado especial